



Relaciones. Estudios de historia y sociedad

ISSN: 0185-3929

relacion@colmich.edu.mx

El Colegio de Michoacán, A.C

México

Padilla Arroyo, Antonio
CONTROL SOCIAL E INSTITUCIONES DE RECLUSIÓN. EL CASO DE LA PENITENCIARÍA DE
JALISCO EN EL PORFIRIATO

Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. XXII, núm. 88, otoño, 2001

El Colegio de Michoacán, A.C

Zamora, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13708808>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

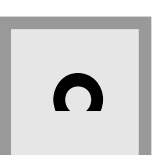
redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

En este texto se describe y examina una de las instituciones de control social, la penitenciaría de Jalisco. Es una contribución al estudio de los regímenes penitenciarios en el siglo XIX, especialmente en el último tercio, en México. El estudio de esos sistemas se sitúa en el marco del pensamiento criminológico y del pensamiento penitenciario, así como de las prácticas institucionales, lo cual permite dilucidar los dispositivos de control que se diseñaron para ejercer la vigilancia, la observación, el castigo y la corrección a diversos sectores como parte de la formación del estado y la sociedad moderna (instituciones de control social, penitenciaría, regímenes penitenciarios, pensamiento criminológico, pensamiento penitenciario, prácticas institucionales, dispositivos de control).



CONTROL SOCIAL E INSTITUCIONES DE RECLUSIÓN. EL CASO DE LA PENITENCIARÍA DE JALISCO EN EL PORFIRATO

Antonio Padilla Arroyo*
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

INTRODUCCIÓN

El presente texto tiene entre sus propósitos describir y examinar distintas facetas de la penitenciaría del estado de Jalisco, situar la labor de ese establecimiento dentro de un sistema de control social. De esta manera pretende contribuir al estudio de las instituciones de control que surgieron y que se conformaron durante el siglo XIX. Dicho sistema puede comprenderse y explicarse como parte de una política social más ambiciosa, entre cuyos objetivos estuvieron atender, vigilar y reprimir a diversos grupos que aparecieron a la luz de la dinámica del crecimiento y la expansión de las ciudades o que se desplazaron hacia ellas, convirtiéndose en partícipes del paisaje social en estrecha vinculación con la

* apadilla@buzon.uaem.mx

creación de nuevos espacios sociales del mundo urbano decimonónico en nuestro país.

Al mismo tiempo que se presentaron las transformaciones del mundo urbano, se elaboró un pensamiento social que sustentó la explicación y justificación acerca de la trascendencia de fundar establecimientos, así como de sus prácticas institucionales con la finalidad de garantizar un efectivo control sobre ciertos sectores de la sociedad. Ese pensamiento fue producto de los estudios que emprendieron los pensadores sociales, cuya materia de observación y examen fueron conductas, valores y estilos de vida que determinados grupos y sectores crearon y difundieron, así como instituciones dirigidas a la ayuda y al control sociales. Según sus reflexiones y sus conclusiones, los comportamientos que cultivaban eran indeseables y perniciosos para la sociedad en su conjunto. De ahí, la importancia y la función que desempeñarían éstas últimas.

Para la descripción y análisis de esta problemática partimos de dos orientaciones metodológicas y conceptuales centrales. La primera de ellas, la proporciona la historia social porque esclarece una porción de la historia que no había tenido la suficiente atención en los trabajos históricos, aquella que fue forjada por un sector de la población marginado y criminalizado. Mediante ella es posible revelar la naturaleza y el sentido de las instituciones de control social, en particular la institución carcelaria. Asimismo porque contribuye a una mejor comprensión de la formación y del funcionamiento de una sociedad específica, de las relaciones que establecen los distintos actores que la integran, de sus intercambios y sus prácticas sociales, de sus modos de vida y, por añadidura, de sus instituciones que inventa y reproduce así como de las ideas y propuestas que las justifican.

La segunda orientación la proporciona la historia de la cultura en tanto que ésta se interesa por el estudio de las representaciones colectivas. Ofrece una posibilidad de discernir las ideas y los proyectos de control social, disentñar las percepciones, los miedos y los temores que se ocultan detrás de unas y otros y que se difunden bajo el manto de racionalizaciones discursivas, en este caso el pensamiento criminológico y penitenciario, que se presentan como un conocimiento científico de la naturaleza humana en general y de conducta criminal en particular, y de establecer los nexos entre esas racionalizaciones, los mecanismos

y las prácticas que se instauran para el ejercicio de la vigilancia, la observación y la dominación de unos grupos sobre otros.

La historiografía reciente en México ha venido ocupándose tanto de las instituciones del control social como del discurso que las sustenta. Cada vez es mayor el número de historiadores que han centrado interés en profundizar y dilucidar los dispositivos bajo los cuales funcionan, su racionalidad interna, las prácticas que de ellas derivan y los grupos de población a quienes va dirigido. De igual manera, se han interesado por examinar los niveles de elaboración discursiva que permiten justificarlas, especialmente en lo que respecta al pensamiento criminológico, el cual ha sido interpretado como un campo de producción y generación de conocimientos y saberes específicos que, a su vez, están moldeados por una visión de la sociedad y de los individuos. Ambos tipos de estudios históricos han aportado elementos valiosos para examinar las circunstancias, los medios y los fines para forjar y reproducir las “instituciones totales”, de acuerdo con las definiciones de Michel Foucault e Erving Goffman.

Dentro de la historia social podemos citar los trabajos de Nydia E. Cruz Barrera en torno a la penitenciaría de Puebla en el siglo XIX. Entre otras ideas, la autora sostiene que la formación de la institución carcelaria es producto de la confluencia de la política criminal y la política social que buscaban garantizar el orden social, a la luz de la influencia y el impacto de las nuevas corrientes criminológicas. Según Cruz Barrera, la política social comprendía proyectos educativos, de sanidad y de orden público que buscaban homogeneizar, uniformar e inculcar los valores de obediencia y laboriosidad entre los grupos sociales más desamparados. De este modo, el establecimiento penitenciario fue una pieza fundamental tanto de las políticas criminales como sociales, al concebirse “como un modelo de organización social –por sus funciones y relaciones entre los directivos y sus subordinados, los reclusos– [...] El modelo penitenciario fue un producto consecuente con las expectativas de organización a nivel macrosocial”. Las bases de la institución carcelaria serían la salud, la clasificación de los presos, la inspección, la vigilancia, el trabajo, la instrucción y la disciplina.¹

¹ Cruz Barrera, 1992, 122-123 y 125.

Los estudios de Beatriz Urías Horcasitas, Pablo Piccato, Alberto del Castillo y Elisa Speckman han abierto una vertiente muy importante para el estudio de las instituciones de control social desde la historia de la cultura. Cada uno de ellos ha inquirido en aspectos específicos del sentido y la naturaleza de proyectos, percepciones, ideas, valores y creencias en torno a la función de los establecimientos de atención, observación, vigilancia y corrección de las conductas antisociales y criminales, así como del nacimiento de nuevos campos del saber como la criminología, el derecho penal liberal y positivista y los dispositivos de difusión y circulación de las representaciones colectivas en torno a la criminalidad y los criminales. Por un lado, Urías y Speckman ofrecen importantes estudios de la transición del derecho penal colonial al derecho penal moderno en nuestro país, el cual puso el énfasis en el individuo como eje de la aplicación de la pena y, por lo tanto, en que el castigo debería ser proporcional al delito cometido y según las características personales de los criminales, principio que sería retomado para el tratamiento de las conductas antisociales y criminales, en especial en el régimen penitenciario.² Por el otro, Speckman y Piccato han profundizado en el análisis de la formación de la criminología mexicana y de las influencias que recibió de las escuelas criminológicas europeas y norteamericanas. Ambos coinciden en que durante el porfiriato se presentaron las condiciones más propicias para el nacimiento y desarrollo del pensamiento criminológico porque se presenta “un momento de dominio político autoritario y de preocupación general por la consolidación del orden público”. Los temas de estudio de éste fueron la naturaleza de los criminales, su comportamiento colectivo, social o racial, así como la manera de ejercer la represión sobre ellos, las formas de prevenir sus conductas y sus posibilidades de regeneración. El conjunto de estos elementos formaron parte de una visión de la sociedad que los intelectuales elaboraron e intentaron difundir entre los diversos grupos sociales. En este sentido, Speckman destaca las miradas de la criminología en torno a las mujeres criminales y los mecanismos de difusión de las racionalizaciones discursivas en torno a ellas.³

² Urías Horcasitas, 1997; Speckman Guerra, 1999.

³ Speckman Guerra, 1997, 183-229; Piccato, 1997, 134 y 137; 1997^a, 78-79.

Alberto del Castillo ha destacado la importancia de la prensa como uno de los dispositivos más importantes en la difusión y la circulación de las miradas acerca de la criminalidad y los criminales. De esta manera, ha dilucidado como una gran porción de la prensa porfiriana se convirtió en un instrumento de control social porque mediante ella era posible difundir el proyecto de “orden y progreso” a través de una lectura del control social respecto a las clases populares. Del Castillo, al referirse a la publicación de crímenes, asesinatos y suicidios por el diario católico *El País*, concluye que la función era de reprobarlos moralmente “con el fin de reforzar su misión didáctica y apoyar las normas éticas entre la población”, mientras que el diario *El Imparcial*, cercano a los intereses del grupo porfirista conocido como los “científicos”, también dedicó gran parte de su material periodístico a la “nota roja”, pero haciéndose eco de las ideas y las formulaciones de los criminólogos mexicanos. De esta manera, divulgó una postura “científica” acerca de los factores que explicaban la criminalidad, las conductas antisociales y criminales y, por añadidura. Mediante una postura en apariencia neutral y objetiva, difundía las normas y medidas que la sociedad mexicana tenía que adoptar para la salvaguarda del orden social. De esta manera, la difusión masiva de estos reportajes se realizó a partir de reflexiones morales y contribuyó a moldear estereotipos en torno a la figura de delincuentes y criminales.⁴

Estos estudios permiten situar y explicar la importancia del estudio del funcionamiento de la importancia de la penitenciaría de Jalisco.

De acuerdo con Erving Goffman podemos distinguir cinco tipos de establecimientos que configuran un sistema de control social: las instituciones erigidas para cuidar a las personas que parecen ser inofensivas e incapaces, es decir, los hogares para ciegos, ancianos, huérfanos e indigentes; los establecimientos erigidos para atender a aquellas personas que además de ser incapaces para cuidarse por sí mismas representan un peligro involuntario para la comunidad, tales como los hospitales para infecciosos, los psiquiátricos y los leprosanos. Un tercer tipo lo constituyen aquellos lugares donde se alojan quienes intencionalmente repre-

⁴ Castillo, 1997, 33 y 37.

sentan una amenaza para la sociedad, las cárceles, los presidios los campos de trabajo y de concentración, el cuarto tipo corresponde a las instituciones claramente orientadas a hacer más eficiente una tarea laboral. En este tipo quedan comprendidos las escuelas de internos, los campos de trabajos y diversos tipos de colonias agrícolas; finalmente el quinto tipo lo forman las instituciones concebidas como “refugios del mundo”, los conventos, claustros, monasterios y centros de rehabilitación.⁵

Estas instituciones respondieron, en parte, a la demanda de nuevas actividades y ocupaciones de una emergente organización social, la cual requería de un tipo de trabajador disciplinado y obediente, sometido a ciertos patrones de conducta, así como a la necesidad de disminuir la incidencia de las “clases desvalidas” para inhibir su conversión en “clases peligrosas”. La elite política, en especial los pensadores sociales, sostuvieron que gran parte de los problemas y de las tensiones que originaban esas conductas se debían al crecimiento económico, la falta de hábitos de trabajo y la inclinación de los sectores más pobres a la vagancia, la holgazanería y la mendicidad. Con base en estas ideas se configuró un sistema de control social que se extendió a distintos espacios para la atención social con fines específicos, según los sectores de la población a que se destinaron, lo que implicó un lento proceso de estudio y clasificación de estos grupos.

Unas pretendían prevenir conductas antisociales, entre ellas la prostitución, la vagancia y la mendicidad, mientras que otras se organizaron para reprimir y corregir conductas ilícitas o delictivas. Las primeras quedaron a cargo de la beneficencia pública y privada que orientaron y tuvieron como su tarea primordial socorrer a “las clases más desprotegidas” con el fin de prevenir que la pobreza se convirtiera en una fuente incontrolable de comportamientos antisociales y pusiera en peligro el orden social. Estas instituciones tuvieron como objetivo primordial impedir la proliferación de los criminales y de los crímenes, fomentar el amor al

⁵ Goffman, 1988, 18. Es útil la definición de institución total que proporciona el autor para caracterizar a estos establecimientos. “Una institución total puede definirse como un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente”.

trabajo y a la disciplina, procurar que los inquilinos modificaran su carácter, evitar “los extravíos” y que se perdieran “en pasiones insanas”. Otras se reservaron y quedaron en manos del Estado, en particular, las instituciones carcelarias y correccionales, con fines y medios muy similares a las primeras. Unas y otras sostuvieron la importancia de cultivar y moldear “un ser moral” con nociones del bien “ensanchando los límites de la inteligencia y los buenos sentimientos del corazón”. En ambos tipos de instituciones se ensayaba un modelo capaz de forjar futuros trabajadores y ciudadanos, hombres y mujeres útiles a la sociedad. En ellas se les persuadiría para que comprenderían que “(en) nuestra época es difícil abrirse paso cuando no se lleva un caudal de conocimientos para vencer las dificultades que a menudo impiden la marcha del hombre”, hacerlos conscientes de su deuda y de la obligación de restituir el costo de su estancia a la sociedad porque la existencia de esos espacios no debía juzgarse una concesión gratuita de la caridad, la filantropía y la beneficencia ni un pretexto para fomentar la ociosidad y la holgazanería.⁶

DEFENSA SOCIAL Y APARATO INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE JALISCO

El estado de Jalisco se distinguió, entre otras cosas, porque cimentó desde finales del siglo XVIII, las bases institucionales de un sistema de control sobre las clases pobres, en correspondencia con el nuevo orden social que fue consolidándose durante el siglo XIX. Las instituciones surgieron en la forma de establecimientos de beneficencia pública y privada, las cuales destacaron por su organización y disciplina. Según Mariano Bárcena, los auxilios que recibían las clases desamparadas provenían del gobierno estatal, por medio de una Junta de Caridad patrocinada directamente por filántropos y, en su mayor parte, por asociaciones religiosas, en forma destacada por las Conferencias de San Vicente de Paul. En 1880, el ejecutivo estatal creó la Dirección de Beneficencia Pública, encargando a Jesús Cervantes instrumentar una reorganización de los

⁶ Padilla Arroyo, 1995, 28-35; Padilla, 1993, 54-56.

principales establecimientos que estaban bajo su responsabilidad, el Hospicio de Pobres y el Hospital de Belén, los cuales habían sido edificados con el patrocinio tanto de autoridades religiosas como de algunos particulares acaudalados. Una de las primeras medidas que se aplicaron fue clasificar, dividir y separar a esa mezcla de edades y experiencias que formaban los pensionistas, ancianos y niños pobres para imponer una vigilancia más racional y planificada.⁷

Una pieza de este sistema lo constituyó la Escuela de Artes y Oficios, la cual dependía de una Junta Especial y que formalmente pertenecía al sistema de instrucción elemental, aunque en rigor funcionaba como una institución de control social en tanto que su objetivo era prevenir el vandalismo. El plantel escolar pretendía brindar a los niños pobres una “sólida, completa y fructuosa educación” por medio de la enseñanza de los buenos principios y el aprendizaje de las artes manuales o mecánicas que les procurara “un medio honesto y bastante para su subsistencia”. El proyecto educativo se basaba en inculcar hábitos de disciplina, lo que demandaba que los padres y tutores cedieran sus derechos sobre los menores. Para el director de esta institución, la tarea de este tipo estaba en lograr que sus discípulos reanudaran “(los) mil lazos que la fuerza irresistible de las cosas ha roto en medio de nuestras turbulencias” y en extinguir los peligros “que se ciernen sobre la vida de los pueblos que abrigan en su seno por largo tiempo las turbas ignorantes e incultas que se resisten a aceptar los saludables frenos de la civilización y el orden”.

Esta institución fue notable por los avances en su estructura y disciplina, lo que demostró la experiencia acumulada por sus sucesivas administraciones, convirtiéndose en un ejemplo a seguir. La racionalidad y la sistematización de sus actividades cotidianas, el orden impuesto se revelaba en su reglamento: los alumnos se levantaban a las 5 de la mañana y dos horas después debían haber concluido su aseo personal y de los dormitorios; de 7 a 9 desayunaban y una vez que terminaban se trasladaban a los salones pertenecientes al exconvento de San Agustín donde se les impartía instrucción elemental. Posteriormente laboraban en alguno de los talleres de herrería, rebocería, zapatería, sastrería y tala-

bartería en los cuales permanecían hasta las once y media; al finalizar esta labor se dirigían al comedor en donde permanecían hasta la una y media; después reiniciaban el trabajo en los talleres, el cual finalizaba a las seis y media. Más tarde se les instruía en “educación práctica”, que consistía en el estudio de sus deberes y en normas de buena conducta. Para ingresar a esta escuela era indispensable demostrar un estado de orfandad, suma pobreza o “vicio de los padres”.⁸

Sin embargo, las autoridades estaban conscientes de los obstáculos y las contingencias a que se enfrentaba su metódica y tenaz labor, sobre todo porque los menores se resistían a “comaturalizarse con los hábitos de trabajo y orden (así como con) las costumbres de las culturas que forman el programa de la casa”, la cual se manifestaba en el atón prematuro por abandonar el establecimiento para disponer libremente de sus ahorros, aún cuando sobre ellos pudieran cometerse graves actos de explotación y abusos por parte de los individuos que compraban y comerciaban sus productos, “comprándoles a precios irrisorios los artículos fabricados en los talleres”.⁹

La lógica de funcionamiento del sistema de control social también fue compartido por el régimen penitenciario. Su organización y funcionamiento fue muy similar a las instituciones de beneficencia pública y privada al proponerse adiestrar a los internos en nuevos hábitos de trabajo e infundirles normas morales que guiaran su conducta, aunque la cárcel moderna mantendría el principio de castigar y reprimir las conductas delictivas.

LA PENITENCIARIA DE JALISCO EN EL PAISAJE URBANO

En este marco se sitúa el papel y el lugar de la penitenciaría de Jalisco, uno de los establecimientos de control y reclusión social más importantes y significativos en la formación del sistema de segregación y reclusión durante el siglo XIX a nivel nacional. Para algunos viajeros deci-

⁸ Murriá, 1981, t. III, 324-325.

⁹ Bárcena, 1954, 122.

⁷ Bárcena, 1954, 111.

monónicos visitar la capital del estado de Jalisco fue un placer y una obligación casi religiosa. Deambular por sus calles y parques era una afición que pocos habitantes rehusaban practicar. A los lados de unas y otros se levantaban suntuosos e imponentes edificios que se venían acumulando con el tiempo y formaban ya parte del escenario y del paisaje urbano.

La ciudad de Guadalajara, donde los “pobres eran tan ricos”, albergaba una construcción que causaba, a la vez, temor y certidumbre no sólo por las dimensiones y proporciones físicas y arquitectónicas que alcanzaba sino por la convergencia de destinos, historias e infortunios de los hombres y mujeres que en ella enfrentaban una lucha permanente consigo mismos, en un afán por extirpar sus vicios y pasiones desmedidas y desentrenadas. Esa construcción, la penitenciaría de Jalisco, se extendía a lo largo y ancho de ocho manzanas, circundada “de unos sólidos y espesos muros y contramuros”, y estaba destinada a uno de los proyectos de control social más ambiciosos y profundos del mundo urbano: lograr la metamorfosis de los seres humanos o aun más, hacer de los salvajes y bárbaros hombres civilizados, eliminar el mundo de contrastes y convertirlo en un universo homogéneo y disciplinado.¹⁰

Obra de impecable diseño arquitectónico, sobria y silenciosa, orgullo de sus autoridades y acaso también de algunos de sus habitantes, contenía esa otra historia “estupenda y horripilante, la historia que tiene principio en la tierra y en la maldad que se propaga en las sociedades humanas, es decir, la cuestión del crimen”, según hacía notar el trotamundo inglés Eduardo Gibbon. Por su parte, el entrañable jalisciense Juan B. Inguiz afirmaba que era el “único edificio en su género en la República Mexicana”, tal vez exagerando su admiración porque funcionaba también la imponente penitenciaría de Puebla, a la que sumaría poco la penitenciaría del Distrito Federal. En igual sentido, se expresaba en tono ufano el escritor Manuel Caballero, para quien no había “en el mundo entero una institución de su especie más bien concebida y propiamente

gobernada” y el viajero, Alfonso Dollero, quien aseguraba tener a la vista un edificio “hermoso, macizo como un castillo de la Edad Media”.¹¹ Estas opiniones e impresiones en realidad enfatizaban las aspiraciones, los deseos y los objetivos que los discursos y las prácticas penitenciarias que los pensadores formularon en torno a la penitenciaría de Jalisco, los cuales se centraron en legitimar su utilidad como una institución moderna para la prevención, la reclusión y el tratamiento de los individuos que por sus modos de vida o por inclinaciones biológicas o psicológicas podían poner en peligro el orden. Esta institución tuvo entonces entre sus funciones primordiales “normalizar” o “suprimir” estilos de vida juzgados como “desviados”.

Por eso, la fascinación que provocaba en personas que tenían una imagen más o menos exacta del papel que desempeñaba sugiere las representaciones que provocaba en los individuos comunes y corrientes. Es decir, su sola presencia, intimidatoria por sus dimensiones físicas, proyectaba uno de los propósitos de su creación: imaginar y personificar un control simbólico sobre la población, un ordenamiento del espacio social y urbano en construcción.

El origen de esta penitenciaría ha sido motivo de controversia. Por ejemplo, Luis Pérez Verdaña lo sitúa en 1840 bajo la inspiración de Mariano Otero, Inguiz lo ubica en 1843, mientras que José María Murá en 1845. En lo que no hay duda es que la obra fue concluida por David Bravo, entre 1871 y 1875, con el diseño de José Ramón Cuevas quien se encargó del proyecto original, el apoyo incondicional de Ignacio L. Vallarta, a la sazón gobernador de la entidad, el patrocinio de José María Garibay, presidente de la Junta Directiva de la Penitenciaría y los buenos oficios del “opulento filántropo” Francisco Martínez Negrete.¹²

Tampoco es motivo de polémica atribuir la paternidad de su concepción, su diseño y los principios que habrían de regirla a Mariano Otero. Este elaboró una profunda y meditada disertación sobre las condiciones materiales y humanas que se padecían en la célebre cárcel de la Acordada, herencia de la penalidad colonial en México. Otero tiene el mérito de

¹⁰ De acuerdo con Foucault, “la prisión ha estado, desde sus comienzos, ligada a un proyecto de transformación de los individuos [...] Desde el principio, la prisión debía ser un instrumento tan perfeccionado como la escuela, el cuartel o el hospital y actuar con precisión sobre los individuos”. Foucault, 1992, 88.

¹¹ Inguiz, 1950-1951, t. 2; Gibbon, 1893, 185-209; Dollero, 1911, 24.

¹² Pérez Verdaña, 1910-1911, vol. 2, 636; Inguiz, 1950-1951, t. 2; Murá, 1981, 558; Bárcena, 1954.

haber discutido y propuesto la creación de un sistema penitenciario, al cual estimaba como la “adquisición más preciosa” de las instituciones modernas y, por tanto, una contribución fundamental para la reforma social que el país requería. Después de haber analizado las diferentes experiencias penitenciarias de su época, se pronunció en favor de instituir el sistema de Filadelfia porque en él “la soledad hace reflexionar, el trabajo doma las malas inclinaciones, el aislamiento preserva, la instrucción eleva, la religión moraliza y el arrepentimiento regenera”.¹³

Según Pérez Verdía, Otero inició la construcción del edificio siendo secretario de la Junta Departamental de Jalisco, aunque no logró concluirlo por completo en el sitio original, pues el propio Pérez Verdía señala que hubo dos obras: la emprendida directamente por Otero que fue derribada debido a su cercanía a la ciudad y la que en definitiva se concluyó conocida con el nombre de la Penitenciaría de Escobedo. Esta última idea parece confirmarla Murriá, quien sostiene que ésta se levantó en terrenos propiedad de un carmelita, los cuales se consideraban los más adecuados para contener una obra de las dimensiones descritas. En todo caso, pronto se vieron sus primeros resultados al ser suprimido el presidio de Mezcala, ubicado en la laguna de Chapala.¹⁴

En un extenso artículo, publicado en *El Siglo XIX* en enero de 1850 y cuya referencia directa era la penitenciaría de Jalisco, se ilustran con claridad los objetivos explícitos que persiguen estas instituciones. Aquí nos permitimos reproducirlo en su totalidad porque refleja con exactitud y claridad tanto el pensamiento penitenciario como la práctica institucional mexicana que se pretendía derivar:

Tiempo ha que en esta ciudad comenzó a construirse un vasto establecimiento, destinado a la corrección y castigo de los criminales, con la mira eminentemente filosófica y humanista de que no vuelvan a ofrecerse esos espectáculos repugnantes y sangrientos a que da lugar la ejecución de la bárbara pena que se llama último suplicio.

¹³ Otero, 1959, 115-127.

¹⁴ Pérez Verdía, 1910-1911, vol. 2, 636; Murriá, 1981, 559. Además del presidio de Mezcala, construido en 1819 a petición del gobierno de la Nueva Galicia, la ciudad de Guadalajara contaba con la cárcel de la ciudad, edificada en el siglo XVII.

Es indudablemente importante la abolición de la pena de muerte, que la razón, la filosofía y el cristianismo condenan, pero éste no es sólo el fin que se ha propuesto alcanzar el filántropo, con la erección de penitenciarías. La extensión de estos establecimientos, la solidez en la obra material, el orden que debe observarse en su construcción, los fondos competentes de que es preciso subsistían y un reglamento bien meditado para el gobierno interior, garantizar la seguridad, haciendo casi imposible la fuga, la salud de los presos y detenidos, su corrección moral y los buenos resultados de la educación religiosa y política que debe dárseles, porque todo gobierno para corresponder a la confianza que en él ha depositado el pueblo, debe apelar a todos los medios para impedir la perpetración de los delitos; y muy más honorífico, más glorioso le será transformar a los perversos en seres virtuosos, que matarlos, porque aunque se alegre la razón de que la *virtutis* pública lo releva, ninguna utilidad resulta a la sociedad de la aplicación de la pena de muerte, que le priva de hombres que un poco más tarde le servirían, ni se les sacrifique sobre lo que en voz muy alta diremos que ni la religión cristiana ni una sana filosofía excluyen la posibilidad del arrepentimiento y enmienda del hombre extraviado; y además el corazón del criminal que cesa de latir, ningún germen de virtud derrama, al bajar a la región de la muerte, en el que quedan con vida: “el golpe que descarga la justicia por la mortífera mano del verdugo, dice un grande escritor no hiere sino débilmente a la multitud que presencia el espectáculo; el castigo de una acción criminal no surte el efecto deseado, más grave que a la persona del castigado”.

El pensamiento a la par humano y generoso, de corregir al que ha delinquido, castigándole con la soledad, la meditación y el silencio, y obligándole a que se instruya en sus deberes más importantes, ese pensamiento, que es ya una realidad, como lo demuestran los extensos, sólidos y ordenados edificios, llamados penitenciarías que en varias partes se han levantado, por la fuerza de los progresos de la civilización, han encontrado ecos en uno de los estados de la confederación mexicana, más ilustrados e influyentes. La penitenciaría que rápidamente se está construyendo en esta ciudad, es una prueba de nuestro aserto. Varios funcionarios, entre ellos el Sr. Don Antonio Escobedo, que sobre éste y otros puntos abrigó siempre las mejores intenciones, han empeñándose en su construcción, pero nosotros haremos una mención especial del ciudadano gobernador de Jalisco, porque ha sabido

sobreponer a las desdichadas circunstancias en que nos hallamos, ha hecho se inviertan en la obra, fondos considerables, empero lo calamitoso de los tiempos ha tenido un acierto en la elección de la persona a quien se ha encargado la distribución de los actuales y activar la conclusión del establecimiento que dirige el apreciable arquitecto D. Ramón Cuevas. Un recomendableísimo español, Sr. D. Francisco Martínez Negrere, es el que, tiempo ha, está constantemente ministrando lo necesario para la obra, aun cuando no reciba un peso de la Tesorería del Estado. Tal acción, si recomendable en un mexicano, causa una justa admiración cuando es efecto de la filantropía y generosidad de un extranjero.¹⁵

Jalisco contaba casi treinta años después de esta detallada descripción, con un gran edificio en cuyo interior funcionaba un régimen penitenciario que podía compararse con las prisiones más adelantadas del mundo. Quienes lo recorrían quedaban admirados no sólo por sus enormes proporciones sino también por su notable organización interna. La amplitud de los espacios destinados a los tribunales, los ambulatorios y las celdillas, el arreglo de sus talleres, la disciplina que reinaba y la dedicación de los presos a sus labores eran parte de sus rasgos distintivos. Además su enfermería era comparable a las más aventajadas del mundo y poseía un cementerio que dejaba poco que desear. Sus escuelas eran de primer nivel, reunían los instrumentos y los métodos pedagógicos más avanzados de la época que, según las autoridades penitenciarias y políticas, las colocaba en la posibilidad de competir con las escuelas particulares más importantes del estado, lo cual era mucho decir. Acaso la única preocupación de los encargados del establecimiento era el suministro del agua que en momentos de escasez ocasionaba algunos trastornos en el desalojo de los desperdicios. Sin embargo, este pequeño inconveniente no empañaba el orgullo de las autoridades, las cuales aseguraban que la penitenciaría era “un colosal asilo para la reforma del criminal”. El trato a los presos era humano, aunque el régimen no debía ser severo. Un ejemplo de ello era la aplicación de un correctivo que consistía en perder el derecho a la libertad preparatoria por mala con-

ducta y la posibilidad de sujetarlo a fuertes trabajos corporales. El problema de la seguridad no existía pues además de la gran vigilancia, mantenía elevados y “en extremo sólidos” muros, que imposibilitaban cualquier intento de evasión. La penitenciaría se organizaba en tres departamentos: de hombres, de mujeres y de jóvenes delincuentes. Según Gibbon, la penitenciaría de Jalisco era un “colosal asilo para la reforma del criminal” porque en su interior reinaba “la monotonía, el silencio y la soledad”, así como un “verdadero palacio de justicia”, al albergar los Tribunales del estado, un hospital, escuelas y talleres.¹⁶

Esta reunía las condiciones necesarias para considerarse un verdadero régimen penitenciario, según los requisitos y condiciones que Miguel Macedo consideraba indispensables a propósito de la inauguración de la penitenciaría del Distrito Federal:

[En ella] se elaborará la corrección del delincuente corregible y encontrará la segregación y sufrimiento sin infamia ni horror, el incorregible; ella será siempre y para todos fórmula de la suprema ley moral de que el ataque artero o violento al derecho produce como consecuencia necesaria el mal que comienza en las suaves sanciones del orden civil, y llega hasta la privación de la libertad y aún de la vida en las ásperas cimas de la criminalidad [...] [El sistema penitenciario estaba] orientado a la corrección moral y [abarca] todas las fases de la vida del hombre a quien la justicia ha declarado delincuente, desde la celda que ha de ocupar y la alimentación que ha de recibir, hasta sus comunicaciones con el exterior.¹⁷

El edificio penitenciario ocupaba en su planta general 300 metros de longitud y 150 metros de altitud y tenía la forma de un “cuadrilongo”. Su frente principal tenía vista al oeste y correspondía a una extensa plaza en la cual se había plantado un jardín. En su interior había un gran patio circundado por magníficos corredores que formaban el primero y segundo piso, dando acceso a los despachos de la administración judicial. Después se extendían 16 ambulatorios con extensos corredores, que

¹⁵ El Siglo XIX, México, 3 de enero de 1850.

¹⁶ Gibbon, 1893, 192.

¹⁷ Macedo, 1900, 17.

contenían cada uno de ellos entre 40 y 50 celdillas, convergiendo en forma de estrella en una patio especial. A los lados de éstos estaba la prisión de las mujeres y el alojamiento de la guardia, así como un local para la fotografía. En su parte posterior estaba los talleres, los baños, el jardín y “todo lo concerniente a un establecimiento de esta especie”, es decir, las escuelas y la capellanía. En los ambulatorios había “mesas, puestos y vendimias que dan al local el aspecto de un mercado”.¹⁸

EL MUNDO INTERIOR: TENSIONES Y Desequilibrios

El reglamento de la penitenciaría dibuja con claridad las pretensiones formales e informales que involucra el proceso de metamorfosis de la naturaleza humana que pretende la institución carcelaria. En él se incorporan medidas similares a las de otras instituciones afines como hospitales, escuelas de corrección, de artes y oficios, asilos. Por ejemplo, se establecía un régimen de premios y castigos, prohibiendo el empleo de castigos físicos como medio correctivo que serían reemplazados por un mecanismo de vigilancia más sutil a cargo de los custodios, que debía pasar desapercibido “a fin de que el preso no tenga jamás la seguridad de no estar vigilado o de no poder ser sorprendido”. De igual manera se instituía el registro personal que debía de seguirse rigurosamente por medio de “un ejemplar del retrato del preso, el extracto de su proceso judicial, la historia de su conducta en la penitenciaría y las demás piezas que señalen los reglamentos”. Se prescribía la uniformidad de los internos mediante la utilización de una sola vestimenta, “para los hombres camisa y calzón de mantas de rayas en verano, y camisa y pantalón de lana de rayas para el invierno; gorra y zapatos”, en tanto que las mujeres debían vestir “camisa y enagua blanca y túnica de manta en verano, mientras que en invierno camisa, enagua blanca y túnica rayada, así como zapatos y cofia”.

Otra disposición, estrechamente ligada al vestido, era el aseo y el lavado que tenía el propósito de “mejorar los hábitos y costumbres, espe-

cialmente de nuestro pueblo bajo y de nuestra raza indígena”. Estas disposiciones se completaban con la enseñanza religiosa mediante “sacerdotes reconocidos y bien conceptuados de su culto y otras personas de notoria capacidad, honradez y eficacia”, la cual se complementaba con la instrucción primaria la cual tenía carácter obligatorio y la capacitación laboral que comprendía nociones de dibujo lineal o de ornato, así como nociones de química aplicada a las artes. Así, mediante el registro concienzudo de cada una de las actividades que realizaban los presos era posible evaluar el progreso de cada uno de ellos, sujetándolos a un proceso severo de disciplina y control, y con base en él establecer el grado de corrección y cura moral. Todos estos aspectos estaban dispuestos de tal manera que formaran en los delincuentes “el ser moral cuya versión los ha llamado al crimen y engendrar en el alma las nociones del bien, ensanchando en este efecto los límites de la inteligencia y los buenos sentimientos del corazón”.¹⁹

Las dificultades tanto en el estado material como en la organización interna, especialmente en lo relativo a las condiciones de vida de los presos, fueron los signos que caracterizaron a la institución penitenciaria. Pero estas dificultades tienen su racionalidad desde el momento mismo en que se fijan los fines que ha de cumplir como establecimiento de control social. Sin embargo, ambos aspectos estuvieron presentes y de manera reiterada en las preocupaciones de las autoridades penitenciarias y de las dependencias responsables de la custodia de la prisión. Ello porque era necesario garantizar que el proceso de reforma de los reclusos contara con todos los recursos y los medios necesarios. La rigurosidad en la ejecución del tratamiento penitenciario exigía que aún de tales aparentemente mínimos fueran un motivo de inquietud.

De este modo, por ejemplo, puede interpretarse el interés de la rectora del Departamento de Mujeres para que el Tribunal Superior de Justicia realizara las gestiones necesarias a fin de que fuera atendida la solicitud para abastecer de agua y se arreglaran las habitaciones pues era tal su abandono que podían originar una epidemia, con la amenaza siempre presente de romper el equilibrio en la higiene física que un lo-

¹⁸ Bárcena, 1954, 132; Iguiniz, 1950-1951, t. II, 27-28.

¹⁹ *Boletín del Archivo General de la Nación*, 1981/1982, núms. 1/4, 97-103.

cal de tal naturaleza demandaba. En un tono similar se expresó la Junta Directiva de la Penitenciaría, instancia responsable de vigilar que todas las instalaciones estuvieran conforme a las disposiciones internas, la cual informó al ayuntamiento de Guadalajara que no había pasado inadvertida la situación que describía la rectora, pero que la falta de recursos económicos, tanto del municipio como de la Junta, hacía imposible concluir la construcción del departamento, tal y como eran sus deseos. Añadía que algunas obras mayores eran urgentes para mejorar la situación de las presas: instalación de puertas, de rejas y nivelación del pavimento de las celdillas, comprometiéndose a suministrar agua suficiente y apoyar las iniciativas del municipio con el propósito de concluir los trabajos en ese departamento. No obstante, las cosas no marcharon conforme a las pretensiones de la Junta Directiva y, al contrario, agravándose la situación de los reclusos, en particular, en el departamento de hombres.²⁰

Estas comunicaciones revelan uno de los temas más recurrentes en la historia del régimen penitenciario mexicano, la escasez de recursos monetarios para la construcción de edificios apropiados para albergar el modelo penitenciario más apropiado a las condiciones del país, según desprendían los pensadores sociales de la época. Por eso la falta de fondos fue un referente constante entre los penitenciaristas mexicanos, aunque no sólo por ellos, para reflexionar en torno a uno de los pilares del sistema penitenciario, el trabajo de los reclusos más allá de sus fines terapéuticos y reeducativos, de su importancia como fuente de financiamiento y sostenimiento de las cárceles modernas. De ahí, entonces, el debate constante alrededor de las ventajas de la participación e intervención de los particulares en la organización del trabajo carcelario mediante la instalación de talleres.

De igual manera, un tema casi obsesivo en el discurso penitenciario fue el incremento constante del número de internos, lo que reveló la tensión entre las autoridades por el frágil equilibrio de la vida interior en la medida en que ésta requería mantener las condiciones de vida aceptables para aquellos pues no lograrlo así significaba poner en peligro la

capacidad de control y orden. Por eso las peticiones reiteradas de las autoridades penitenciarias, monótonas pero que debían revelar un tono de angustia y temor, para que el ayuntamiento o las autoridades políticas estatales otorgaran los suficientes recursos económicos y, en general, materiales para atender, aun cuando fuera de manera parcial porque siempre las necesidades eran mayores, algunos problemas de la vida cotidiana que implicaba el régimen penitenciario. En este marco se explica, por ejemplo, la solicitud hecha por el gobernador de la penitenciaría Juan Alatorre, quien expuso ante el cabildo de Guadalajara que ante el “grande recargo de presos que hay en ésta” se requerían construir 25 puertas para las celdas a fin de garantizar la seguridad del local pues preveía la posibilidad real de intentos de fuga o amotinamiento, lo cual era grave para todos.

Sin embargo y como ocurría en la gran mayoría de los casos, las autoridades municipales respondían que no contaban con suficientes medios para acceder a la solicitud del gobernador Alatorre. Por su lado, el intendente de la penitenciaría Mariano Moret, también hizo semejantes peticiones al gobierno del estado para que suñera de 22 puertas para las celdillas debido a que había una porción de reos sobre los que no se tenía un efectivo control como para evitar intentos de evasión o “de cualquiera otra clase de desórdenes”. De hecho, para 1877, la población penitenciaria se había incrementado notablemente debido a que se habían reunido en ella los presos “de la antigua cárcel de palacio”, aunque todavía no podía atribuirse a un exceso de internos que la hicieran prácticamente ingobernable.²¹

En efecto, aunque el municipio mostraba un interés genuino por ayudar en los trabajos físicos que requería una cárcel moderna, la imposibilidad de agenciarse ingresos estables provocaba que sus esfuerzos resultaran mínimos. Así se lo hizo saber al gobernador del estado en un extenso oficio en el que demostraba la franca y virtual situación de ruina de las arcas municipales y “la enorme deuda” que había contraído por conceptos de salarios de los empleados municipales y penitenciarios. Para el presidente del ayuntamiento no había duda del origen de

²⁰ AHMG, Archivo Histórico Municipal de Guadalajara (AHMG), caja 1234, paquete 152, expedientes 21 y 46, 1874.

²¹ AHMG, c. 1234, paq. 152, exp. 57, 1874; Archivo Histórico del Estado de Jalisco (AHEJ), Justicia, c. 236, exp. 5594, 1877.

tal condición: el “habérseles impuesto la injusta obligación de cubrir todos los gastos de la penitenciaría, los cuales fluctuaban entre 30 y 40 mil pesos mensuales. Agregaba que los impuestos creados para el mantenimiento de la prisión no habían dado “nunca el resultado deseado”, y, por lo tanto, había afectado la atención que merecían otros ramos como la instrucción primaria, el alumbrado, la policía y el ornato del municipio. En esa testitura, el ayuntamiento se había reducido “desde hace algunos años, más que a una Junta Administradora del mencionado subsidio, con alguna que otra misión política” y en esa función había tenido que recurrir a los particulares, quienes también había padecido un “desnivel hacendario”. Estas circunstancias obligaban al ayuntamiento a solicitar al gobernador hacerse cargo del sostenimiento de la penitenciaría. Por su parte, el titular del Ejecutivo estatal, Jesús Leandro Camarena respondió que estudiaría la proposición y que, mientras tanto, enviaría un presupuesto para cubrir los honorarios de los empleados a quienes se les adeudaba un monto aproximado de 94 231 pesos. El cabildo agradeció el gesto de Camarena pero insistió en su solicitud en el sentido de que fuera el gobierno estatal asumiera la administración del local penitenciario, declarándose en “bancarrotita”. La respuesta final del gobernador fue que según sus posibilidades colaboraría en los trabajos del ayuntamiento.²²

Pese a estas dificultades económicas, los requerimientos que demandaba la instauración del régimen penitenciario obligaban a construir algunos espacios imprescindibles para el control, la atención y la vigilancia de los internos. Uno de ellos era la instalación de la enfermería, la cual estaba concebida para atender a los reos que no podían, por su peligrerosidad o por las largas condenas que se les habían impuesto y, por añadidura, cavilaran algún proyecto de evasión, ser trasladados al hospital de Belem. La necesidad de construir estos locales provocaba tensiones y conflictos entre distintas autoridades no sólo porque se ponía en juego la responsabilidad directa de la vigilancia de los internos sino porque representaban desafíos a su jerarquía en la esfera del poder. Así, por ejemplo, Juan Alatorre informó al ayuntamiento que cumpliendo órde-

nes del Jefe Político de Guadalajara, se había establecido una enfermería al interior de la penitenciaría, lo que había provocado algunos problemas para el desalojo de los desechos orgánicos con el consiguiente riesgo de provocar epidemias, dando por hecho que tal medida había sido avalada por el ayuntamiento. Sin embargo, ante el asombro de Alatorre, el cabildo ordenó de inmediato la supresión del hospital con el argumento de que éste no reunía las condiciones mínimas de higiene ni tenía los suficientes medicamentos, según lo había hecho saber la Junta de Salubridad de la propia penitenciaría, por lo que en caso de que los reos requirieran de atención médica tendrían que ser remitidos al Hospital de Belem hasta en tanto no se determinara la inauguración de la enfermería.²³

En estas condiciones, en 1877, el gobernador de Jalisco, Jesús Leandro Camarena, reconoció ante el Congreso de la entidad que la penitenciaría se encontraba en un proceso de construcción, aunque funcionaban varios departamentos, lo cual quería decir que el propio régimen penitenciario estaba en vías de instaurarse. Con todo, la cárcel de Jalisco albergaba ya una cantidad considerable de presos, entre 1 600 y 1 700. De este modo, advertía que la organización interna no había alcanzado la perfección deseada como “lugar de castigo y corrección” y hacía notar que su mantenimiento resultaba “todavía oneroso para el estado”, a pesar del subsidio que otorgaba el municipio y de la recaudación de impuestos destinados a su edificación, los cuales apenas alcanzaba a cubrir la alimentación de los presos, lo que daba una idea exacta de las condiciones de vida en la que se encontraban éstos. Por ello insistió en la urgente necesidad de hacer funcionar los talleres y convertirlos en una fuente de ingresos mucho más estable, donde los internos encontrarían ocupación haciendo del trabajo carcelario un pilar del régimen penitenciario.

El informe de Camarena marcó uno de los momentos más importantes de la instauración del sistema penitenciario, no sólo para Jalisco sino para el país, al hacer inminente la expedición de un decreto que reglamentaría la obligatoriedad del trabajo. En este documento se proyectan

²² AHMG, c. 1233, pag. 141, exp. 118, 1876. El fondo especial provenían de los impuestos a bebidas alcohólicas, de las loterías y el importe de multas.

²³ AHMG, c. 1233, pag. 141, exp. 92, abril/octubre de 1876.

las representaciones que tenían las autoridades de la cárcel moderna: la gran fábrica donde no sólo se sometería a los hombres a una disciplina rigurosa y controlada, sino esa empresa de metamorfosis de la naturaleza humana en la que la materia prima eran esos hombres perversos y malvados que habían atentado contra el orden social y que, al final del proceso que significaba el régimen penitenciario, arrojaría productos totalmente nuevos, hombres decentes y honestos. En los talleres habría “tantos operarios como hombres”, en el que el trabajo los igualaría en una sola condición porque éste no sería una “concesión otorgada como gracia, cual hoy sucede, a determinados presos, sino la condición ordinaria de la existencia del reo dentro de la penitenciaría”. La percepción del trabajo artesanal, los pequeños talleres que funcionaban y en los que se ocupaban 120 hombres eran “diminutos, con pocos e imperfectos instrumentos” de trabajo, serían reemplazados por prácticamente manutucturas que ocuparían su lugar. Así, se proponía mejorar las condiciones de productividad del trabajo y ocupar el mayor número de operarios. De hecho, este documento formaba parte de una estrategia de control social más amplio que se expresaba en el Código criminal que estaba por publicarse.²⁴

Esta pretensión explica la importancia que tiene desde varios puntos de vista la instrucción y la enseñanza religiosa que, sin duda, alcanza sus mayores logros cuando el interno la asume como necesaria y parte de su vida en la cárcel. Uno de ellos porque el interno considera que es un derecho consubstancial al constituirse en un sujeto de deberes y obligaciones. Precisamente la lógica del sistema penitenciario es lograr que el preso aprenda una serie de valores y conductas que se considerarían lo disponen para una vida “normal”, en un orden que premia los comportamientos aceptados socialmente y castiga los que juzga como impropios, lo que Goffman define como “ajustes primarios y secundarios”.

Desde esta perspectiva se inscribe la solicitud de un grupo integrado por numerosos presos que solicitaron al ayuntamiento de Guadalajara les fuera autorizada la apertura de una capilla en la prisión y la asistencia de un capellán que tuviera libre acceso para suministrar los

consueños de la religión católica. Para los presos era de primordial importancia contar con la asistencia espiritual pues los peticionarios reconocían sus delitos, “pues los tribunales nos han juzgado responsables” y, por lo tanto, su estancia en la prisión les obligaba a someterse a un doloroso proceso “sufriendo el examen de nuestra conciencia”. Destacaban que su condición de criminales no les quitaban los “derechos inherentes a todo ser humano y que reconoce de manera expresa nuestra Constitución, mandándonos respetar y favorecer”. El alegato se centraba en que uno de los derechos, “el principal de esos derechos”, era que cada individuo mantuviera “con su Criador, las relaciones de obediencia y adoración en el modo que haya llegado a entender que el más acepto [sic] al Ser Supremo”.

Para no dejar lugar a dudas, el grupo afirmaba su adhesión a la fe católica, a sus prácticas y, desde su visión, señalaba que los desvaríos de sus actos se debían a la ignorancia de los “deberes con Dios, con nuestros prójimos y para consigo mismo”, los cuales se remediarían conociendo sus obligaciones. La religión católica, consideraban, era “el medio a propósito para moralizar al individuo” y subrayaban que “nadie podrá poner en duda la influencia del catolicismo en la vida social, cuando enseña y apoya los legítimos derechos del hombre y obliga a respetar los ajenos”. Así, la enseñanza religiosa podía ser un medio insustituible para presentarse rehabilitados ante la opinión pública y que mejor que para cumplir con su afán tener un sacerdote, quien les mostraría “el lado filosófico y moral” de su conducta desviada, contribuyendo a

llenar de gloria a nuestros actuales munícipes que con tanto celo se están esforzando en hacer de nosotros hombres útiles para la sociedad y para nuestras propias individualidades, pues con este fin se han establecido talleres y se trata de establecer más para que tengamos trabajo y vivamos ocupados honestamente en esta casa.

Desde el discurso de los internos, religión y trabajo establecían un vínculo armónico para alcanzar su regeneración. La respuesta a la solicitud de los internos fue el silencio y no porque las autoridades la creyeran injustificada o porque no compartieran los argumentos de los pe-

²⁴ *Memoria de Gobierno, 1876/1879*, 41-78.

tionarios sino por la existencia de un ordenamiento que prohibía a cualquier ministro de culto visitar u oficiar los auxilios espirituales que demandaban.²⁵

En diciembre de 1882, el Supremo Tribunal de Justicia del estado realizó una visita a la penitenciaría para conocer la situación jurídica y las condiciones de vida de los presos. En el informe que presentó a las autoridades estatales apuntó que en el departamento de detenidos los procesados no tenían queja alguna que presentar, excepto una que negaba la acusación de haber intervenido en una fuga que se había realizado el día anterior. Aunque la actitud de los miembros del Tribunal fue minimizar el incidente, su sola presencia y la prontitud con la que habían organizado su visita mostraba, al contrario del tono empleado en su reporte, que no era un asunto menor, creándose una situación bastante delicada para el funcionamiento de la cárcel. El intento de fuga significaba por sí mismo poner en entredicho la eficacia de los controles y la vigilancia que sobre los internos se establecía, desafiaba el ejercicio del poder jerárquico, cuyo objetivo es mantener la disciplina y la lealtad de éstos hacia las autoridades y, más aún, simbolizaba la solidaridad entre los internos contra todos los esfuerzos empleados por las autoridades para tratar de desarticularla. Las razones para tales sucesos pueden haber sido varias. El Tribunal no ofreció detalles de lo acontecido ni tampoco las autoridades penitenciarias, que ante éste tipo de hechos prefieren guardar silencio precisamente por la gravedad que representa para la vida carcelaria.

Pese a las reservas de las autoridades puede advertirse, según la información proporcionada por los miembros del Tribunal, que en la prisión había una serie de irregularidades que bien pudieron ser el origen del malestar y la inconformidad hasta lograr la complicidad de un mayor número de presos, sobre todo por la situación jurídica y las condiciones de vida en que se encontraban. Así, por ejemplo, en el departamento de sentenciados, la comisión del Tribunal recogió diversas quejas de los reos: unos alegaron que habían concluido sus condenas y pese a ello no se les liberaba, entre ellos había quienes tenían 13 años de reclusión,

tiempo que no había sido suficiente para aclarar su situación, así como un menor de 10 años que había sido enviado al local por el jefe político de Guadalaajara para que “aprendiera un oficio”, mientras que otros denunciaron el despojo a que los sometían distintos empleados de la penitenciaría del dinero y de la ropa que sus familiares les enviaban para hacer menos difícil su situación personal, en tanto que los más señalaban que no se les proporcionaban los útiles para cubrirse. Tampoco fallaron las reclamaciones por lo escaso de las comidas o por no recibir el alimento prescrito por el médico del hospital. En contraste, en el departamento de mujeres, las internas expresaron laconicamente “que nada tenían que decir”.²⁶

De hecho uno de los móviles más importantes que mueven a los internos a fugarse, lo cual como hemos hecho notar se convierte en un verdadero reto al aparato penitenciario, es la posibilidad siempre seductora de burlar y romper con los mecanismos de control interno, tanto físicos como mentales, que atraviesan toda la vida cotidiana dentro de la prisión y que se diseñan desde un cuerpo especializado que los pone en ejecución. El éxito de la evasión dependerá de la capacidad de apoyo interno que logren tener quienes estén dispuestos a intentarla. La enorme labor tanto material como de colaboración o, en su caso, de delación, voluntaria o involuntaria, revela la destreza y la habilidad de persuasión que despliegan sus autores, el conocimiento que llegan a adquirir del funcionamiento de la institución. Al menos esta es la impresión que deja la crónica periodística sobre una “gran tentativa de evasión” en la penitenciaría de Jalisco.²⁷

El suceso se desarrolló el 25 de septiembre de 1895, a las ocho de la mañana, cuando el director de la penitenciaría, Joaquín Rosado, descubrió una perforación de tres metros de profundidad por sesenta centí-

²⁵ AHEJ, Justicia, c. 285, exp. 6621, 1883.

²⁷ El diseño arquitectónico de las cárceles modernas tiene entre sus preocupaciones evitar cualquier tentativa de fuga. Para el caso de la penitenciaría de Jalisco se advertía lo siguiente: “La fuga es allí menos que imposible, pues además de la gran vigilancia que se emplea día y noche, los muros son muy elevados y en extremo sólidos; los cimientos tienen cuatro metros, y así las excavaciones son impracticables”, véase Cardona, 1898, 379-396.

metros de ancho, en la celda 122, habitada por Catarino Nuño quien cumplía una sentencia de 20 años de prisión por el delito de homicidio. Resulta notorio que fuera el propio director de la penitenciaría quien descubriera el intento de fuga, lo cual no puede pensarse que haya sido producto de la casualidad o de los buenos oficios del funcionario penitenciario, sino de una denuncia de los propios internos pues no es de creerse que después de varios días, tal vez meses, de trabajo metódico y discreto hubiese tenido la agudeza de revisar la celda del interno. Evidentemente, Catarino Nuño tenía el apoyo y la complicidad de otros reos, sobre quienes cayeron las principales sospechas de complicidad por estar sentenciados a las mismas penas. Por lo complicado de los trabajos es posible suponer que atrás de ellos había un apoyo más decidido de, al menos, una parte importante de presos, porque según las propias autoridades “los reos tuvieron que romper los cimientos de un metro de espesor y deshacerse de ochenta sacos de tierra que extrajeran de la excavación”. Por eso, las autoridades expresaron desconcierto y duda pues “se ignora quienes puedan estar complicados en esa tentativa de fuga ni los proyectos que tenían respecto del lugar de salida”. En contraste, en un tono de autoconsuelo, la crónica concluía que no había “que lamentar ahora una evasión, que sin duda habría sido una de las más ruidosas por sus circunstancias excepcionales”.²⁸

Acaso por esto, las autoridades muestran una especial preocupación por mejorar hasta cierto punto las condiciones de vida de los internos, pero siempre organizadas bajo un régimen de premios y castigos que, en gran parte, es dispuesto de manera discrecional a fin de garantizar la lealtad vertical de éstos hacia aquellas, de ahí que la situación de los presos dependía del departamento en que se encontraban. Así, en el departamento de detenidos, las condiciones de vida eran mejores que en el de sentenciados y eran superiores en el de mujeres que en el de hombres, pero el bienestar en todos ellos se supeditaba a las utilidades que podrían obtenerse del trabajo carcelario, como lo hemos hecho notar según lo habían establecido con claridad las autoridades jaliscienses años antes. De este modo, no resulta extraño que el intendente de la peniten-

ciaria indicara que la Junta Directiva se encargaba de distribuir tanto la ropa y frazadas como las raciones de alimento según las utilidades que aportaba el trabajo de los internos o bien que las instrucciones fuera dictadas en forma directa por el gobernador de la entidad, como en la disposición que giró relativas a que los enfermos recibieran la misma alimentación debido a los gastos que originaba la preparación de dietas diferentes.²⁹

Desde 1882, en cambio se había expedido el “Reglamento para la Penitenciaría del Estado”, el cual había permitido modificaciones en la organización interna tales como separar en dos departamentos a los presos, sentenciados y procesados, y uno más para mujeres, con lo cual se había resuelto el problema del hacinamiento y la confusión, en la ociosidad y en condiciones higiénicas desfavorables. Para 1883, se había logrado una eficiente separación y clasificación de los presos según la situación jurídica de cada uno de ellos, asignándoles a cada uno de ellos tareas específicas en los talleres, obligándolos a concurrir a las escuelas para recibir instrucción, bajo un régimen de “disciplina severa”. En ese año se contabilizaban 648 presos, de los cuales 120 habían cometido delitos federales. Según opinaba el gobernador Francisco Tolentino ello había permitido que “el estado moral de la prisión nada deja que desear, pues a la vez que se nota en ella arrepentimiento, da muestras de laboriosidad en los trabajos a que se dedica”.³⁰

Sin embargo, para 1886, las condiciones de vida volvieron a sufrir un deterioro de forma sustancial. Al menos esta es la impresión que dejan las quejas de los presos en distintos meses del año. En abril de ese año, el Tribunal de Justicia recibió varias reclamaciones por la falta de ropa. Pero algo había dejado la experiencia anterior, pues de inmediato el intendente fue autorizado para proveer de lo necesario a los presos, aunque no fue sino un mes después cuando recibieron lo solicitado no sin antes haber intervenido directamente el gobernador y, en septiembre, de nueva cuenta la Comisión de Cárceles del Ayuntamiento fue requerida en igual sentido. Además se informó “de la poca y mala clase de alimentos que se les da”, así como de las amenazas del intendente contra

²⁸ El *Globo*, México, D.F., 27 de septiembre de 1895.

²⁹ AHEJ, Justicia, c. 285, exp. 6621, 1881

³⁰ *Memoria de Gobierno*, 1883, 24-25

los presos que protestaban durante las visitas realizadas por los miembros del Tribunal, los cuales, a su vez, informaban al gobernador para que hiciera lo posible por remediar las irregularidades denunciadas.³¹

Sin embargo, las denuncias revelan un estado de cosas que permite comprender y explicar la lógica de funcionamiento del régimen penitenciario y, en general, de las instituciones de reclusión. Estas situaciones tienden a volverse más complejas y sacan a flote la vida cotidiana de las instituciones de reclusión. Por eso el examen de un acontecimiento simple y sin importancia aparente puede adentrarnos en su mundo interior. Así, en momentos de crisis, las que aparecen como prácticas “normales” y naturales, valores compartidos y asumidos por los distintos actores sociales para garantizar la reproducción del mundo interior, surgen con fuerza para develarnos aspectos que conforman la vida institucional. Así, en una comunicación dirigida al Tribunal Superior por un preso se revelan algunas formas de producción y reproducción de la práctica carcelaria. Después de apuntar que sufría una condena de ocho años por sedición, informó que llevaba más de dos años de trabajar en los talleres del establecimiento sin haber recibido ninguna gratificación y no veía por ello ningún beneficio personal, tal como lo ofrecían las autoridades penitenciarias. Frente a su situación, solicitaba le fuera autorizado a “trabajar en propiedad”, pues su situación era ya desesperada al tener la responsabilidad de mantener a “su pobre y anciana madre que sufre la más cruel miseria y espantosa de las necesidades”.

Además denunciaba los excesos a los que usualmente era sometido por parte de algunas autoridades de la prisión. Estas le recogían la poca ayuda que le podía brindar su madre y, sobre todo, la intolerable actitud de éstas, “recibiendo un castigo a principios de mes de estar dos días sin sol por una falsa calumnia del bastonero mayor”. Sus males no se detenían ahí, pues varios de los empleados le exigían trabajar en el taller de palma sin percibir “ninguna recompensa”, lo cual supone un proceso de mortificación y humillación permanente hasta lograr el sometimiento deseado por la institución total a fin de ir estableciendo una serie de medidas que dependen de las autoridades jerárquicas. De he-

cho, para éstas es indispensable proceder de esa manera a fin de lograr que el interno conozca y ejercite “las reglas del juego” tanto formales como informales. Por eso, la respuesta que se dio a la queja fue que el intendente se haría cargo de imponer los castigos a sus subalternos, el cual procedió a asignarles otras funciones.³²

El trasfondo de esta situación tenía relación con los objetivos implícitos y explícitos que se tratan para la cárcel moderna. Durante esos años, la población penitenciaria se había incrementado de manera considerable, lo que explica un descenso notable en las condiciones de vida en la cárcel que al combinarse con la idea de que los talleres proveerían de mayores recursos a la administración carcelaria originaron las peticiones y las denuncias de los reclusos en tanto que sus empeños puestos en el trabajo no les rendía lo que con tanto afán les prometían las autoridades, es decir, la recompensa de un ingreso por un trabajo honesto y digno. Y del cumplimiento de estas promesas dependía la confianza y la lealtad en la autoridad, del ejercicio vertical de poder. De ahí la gravedad de la situación en ese momento.³³

Para las autoridades era claro el peligro que representaba mantener la vida carcelaria sin cambio alguno, sobre todo cuando el incremento de la población podía ocasionar un relajamiento mayor de los controles internos, pero tampoco estimaban conveniente elevar las condiciones de vida de los presos tal como éstos lo deseaban. El meollo del asunto residía en una clasificación inadecuada de los presos como parte de la organización de la vida institucional. De ahí, la iniciativa del gobernador del estado, Francisco Tolentino, quien pretendió reabrir el antiguo presidio de Mezcala para destinarlo al “establecimiento de corrección penal para los delincuentes jóvenes”, y separar a éstos de los adultos, justificando la medida con el argumento de que la convivencia entre ambos “resultaba contraproducente para el propósito de enmienda”. Si bien es cierto que la iniciativa fue aprobada por el Congreso estatal, ésta nunca se aplicó.³⁴

³¹ AHEI, Justicia y Seguridad Pública, c. 289, exp. 6707, 1883.

³² AHEI, Justicia y Seguridad Pública, c. 289, exp. 6707, 1883.

³³ AHEI, Justicia, c. 312, exps. 7196-7200, 1886.

³⁴ AHEI, Justicia, c. 312, exps. 7196-7200, 1886.

En cambio se optó, al parecer, por una fuerte inversión en las instalaciones, al mismo tiempo que instrumentó un mecanismo de clasificación de los reclusos por el tipo de delito y grado de peligrosidad, según lo prescribía el Código Penal de la entidad, lo que en efecto garantizó un control interno más eficaz. Para 1866, los gastos de mantenimiento de la penitenciaría de Jalisco se calculaban en 60 mil pesos mensuales con lo que la situación de los presos había mejorado notablemente porque éstos habitaban celdillas aisladas, estaban bien vestidos, mejor alimentados y aseados, ocupándose la mayoría de ellos en los talleres. Las autoridades estatales y penitenciarias no podían disimular su satisfacción por las mejoras considerables, poniendo a esta cárcel como un modelo penitenciario a nivel nacional. Para dar un ejemplo de la certeza de sus logros, la Junta Directiva decidió solicitar a las autoridades estatales fueran rebajadas las condenas de algunos presos que se habían distinguido por su buena conducta, su constancia para asistir regularmente a las escuelas y, más aún, recomendaban que varios reos federales también fueran beneficiados con el mismo beneficio “para que no existan preferencias en el establecimiento y se vieran favorecidas con las mismas rebajas”.³⁵

Sin embargo, en julio de 1899, el Inspector de Bebidas y Comestibles comunicó a la Junta de Salubridad que las condiciones de las bebidas y los comestibles de la mayoronomía de la penitenciaría eran malas y la alimentación no era variada conforme a las instrucciones y recomendaciones de esa instancia. La calidad de la harina era baja, añadía el inspector, encontrándola “fermentada debido a que estaba preparada con masas que han permanecido en artozas 8 horas a lo menos, agregando la de estar el nixtamal demasiado cocido”, por lo que sugería mayor cuidado en la preparación de éste “para no dar mal gusto a las tortillas”. En este sentido, el periódico *Juan Pinedero* se hizo eco de las denuncias acerca de la alimentación que recibían los presos y acusó directamente al proveedor de la penitenciaría y secretario de Gobierno Juan Matute de ser responsable de esa anomalía. Por su parte, éste se defendió señalando que siempre había cumplido con sus obligaciones, sobre todo

porque en su papel de empleado público tenía una encomienda de muy alta responsabilidad. Por eso pedía que se realizara “una investigación muy minuciosa sobre el particular, pues creo que el Gobierno no debe dejar desapercibido que un empleado suyo este lucrando con los fondos que le ha confiado”.

En efecto, Mariano Bárcena a la sazón gobernador del estado, le tomó la palabra e instruyó a sus subalternos para que efectuaran la averiguación y dieran con el responsable de las irregularidades. Las conclusiones de la investigación demostraron que la razón le asista al periódico, aunque a esas alturas Matute había sido removido de su cargo por Fortino España. Sin embargo, el visitador comisionado por Bárcena reconoció que la comida que se preparaba en la cocina de la penitenciaría cumplía “con su objeto”, pues “como era de suponerse era sencilla pero bien balanceada y sus componentes eran de primera calidad”. Pero el problema no terminó ahí y, en cambio, se manifestaron las diferencias que existían entre los distintos niveles de autoridad que involucraban al director de la prisión, la rectora y la proveeduría. Según explicó el visitador, el proveedor mostraba su “repugnancia en someterse a la fiscalización que el reglamento de la penitenciaría ordenaba y quería establecer cierta independencia de su oficina con la del Director de la misma”, debido a que éste había sido el responsable de la denuncia en contra del proveedor “por la irregularidad que con un mismo número de presos se hace del gasto de maíz y leña, y cuyos artículos se entregan diariamente a la Rectora”, acusándola, a su vez, de la “mucha torpeza y desorden en el manejo del departamento de mujeres”. El reporte del visitador ponía al descubierto lo que se juzgaba como malos manejos en el abastecimiento de los alimentos. Con base en el informe rendido por Pío Morfín, el gobernador Bárcena eximió de responsabilidad tanto al director como a la rectora y llamó severamente la atención del empleado de menor jerarquía tal y como ocurriría cuando se hallaban involucradas altas autoridades.³⁶

El tema de la alimentación, uno de los más delicados en el funcionamiento de la institución penitenciaria, fue motivo de atención del nuevo gobernador de la entidad Luis C. Currel, en 1889. En su memoria al

³⁵ AHEI, Justicia, c. 324, exp. 7075, 1888; González Navarro, 1985, 146.

³⁶ AHEI, Justicia, c. 354, exp. 7075, 1888; c. 355, exp. 7890, 1889.

Congreso estatal expuso el mal estado de los braceros y de las hornillas, las cuales consumían cantidades abundantes de leña, así como el deterioro de las vasijas donde se preparaba el alimento, las cuales “eran grandes calderos de hierro muy trabajosos para manejarse”, lo que ocasionaba que al momento de sufrir cualquier desperfecto dejaban sin comer a los presos “por el tiempo que durase su reparación”. Para remediar estos males se había adquirido una “cocina económica de hierro”, con el beneficio adicional de suprimir la contrata a particulares. Para Curiel esta medida aunque trivial en apariencia tenía gran importancia para mantener el orden y la disciplina porque evitaba desperdicios, así como disgustos entre las autoridades y, acaso lo más importante, reclamaciones y protestas de los internos, cubriendo las necesidades de un promedio diario de cerca de mil 141 presos, entre ellos 89 mujeres. Al mismo tiempo informó, se continuaban las reparaciones y adecuaciones al edificio como el enrejamiento de celdillas, su pavimentación, blanqueo y pintura, así como el desasolve de cañerías.³⁷

EL TRABAJO QUE REDIME

En junio de 1876, el gobernador de la penitenciaría Ignacio Matute presentó ante la Junta Directiva del Establecimiento una propuesta para reglamentar el trabajo en las cárceles. En su exposición de motivos consideraba que, debido al difícil compromiso de garantizar la tranquilidad de la sociedad y mejorar la situación de “los desgraciados criminales”, quienes padecían “una verdadera enfermedad moral”, era indispensable encontrar instrumentos adecuados para alcanzar su moralización y corrección. Consideraba que el mecanismo ideal para estos fines era “el arreglo del trabajo de los presidiarios”. Sin embargo, “el arreglo del trabajo” afrontó en sus inicios diversos obstáculos: la falta de recursos, la poca experiencia de las autoridades en estos menesteres y, sobre todo, la garantía constitucional de la libertad de trabajo, la cual representaba un impedimento legal para ocupar a los presos en actividades productivas

sin su consentimiento. Frente a estas dificultades las autoridades optaron “con fomentar su lento desarrollo con los reducidos elementos con que pueda disponerse”, adoptándose medidas para estimular el trabajo de los presos, entre las que se encontraban la reducción de las penas, “según la importancia y la categoría de los trabajos”.³⁸

La propuesta de Matute aconsejaba que los presos interesados en trabajar debían sujetarse a una revisión de sus antecedentes con el propósito de persuadir a los presos de que el trabajo en las cárceles era un premio a su comportamiento, aunque también evitaba que quienes purgaran largas condenas se aprovecharan de la situación para fugarse, lo que implicaría incrementar los gastos por la necesidad de contratar custodios. La experiencia había demostrado, en opinión de Matute, la importancia de evaluar esos elementos no sólo con esos objetivos, sino lograr un aumento de la productividad del trabajo de los presos, pues ya se había probado que salía menos oneroso contratar a trabajadores libres para ciertas obras públicas en vez de que fueran realizadas por los reos. Recordaba que “los trabajos de empedrado a que fueron sacados varios presos, salió costando tres o cuatro centavos más por metro cuadrado de lo que importaba antes que se ejecutaran con puros trabajadores libres”. Así, si bien el trabajo carcelario podía ser un elemento para la reeducación del reo, no podía limitarse a ello en tanto que podía abaratar los costos de la mano de obra y pudiera servir como una fuente de ingresos para financiar parte de los costos del mantenimiento de la prisión. Su carácter correctivo estaba entonces en la posibilidad de convertirlos en auténticos trabajadores bajo la supervisión de una autoridad. Para el gobernador Camarena, hacer redituable el trabajo de los presos significaba no necesariamente que el trabajo se aplicara a obras públicas, sino la organización de talleres donde los reos se ocuparían, abaratando los costos de contratar mayor número de vigilantes y, en cambio, se aprovecharían los productos de los presos para obtener mayores recursos, aun descontando la parte correspondiente al pago de los trabajos de los internos.³⁹

³⁷ *Memoria de Gobierno*, 1890, 29-51.

³⁸ AHMG, c. 1233, pag. 141, exp. 85, 1876; AHBJ, Justicia, c. 228, exp. 5226, 1872.

³⁹ AHMG, c. 1233, pag. 141, exp. 85, 1876, *Memoria de Gobierno*, 1879, p. 43.

Para uno de los penitenciarios más notables del periodo, Antonio Medina y Ormaechea, el trabajo carcelario no podía ser arbitrario sino que debía realizarse un estudio detenido a fin de darle una organización racional que no rompiera con la idea de igualdad entre los internos no debiendo considerarse un privilegio sino una conquista que los presos alcanzaban con base en su buen comportamiento. Por eso no podía imponérseles un trabajo que desconociera sus antecedentes. De esta manera recomendaba que los presos “en la medida de lo posible (desempeñaran) sus ocupaciones habituales que debe ser respetadas” porque “la profesión industrial no podría fundar un privilegio para aquellos que la tuvieran antes de su encarcelamiento”. De este modo el régimen penitenciario pretendía desviar a los reos de “sus inclinaciones viciosas y conducirlos a ser sabios, aplicados e industriosos” procurando a cada uno de ellos los instrumentos, libros de arte, profesión e industria, más apropiados a su “constitución, aspiraciones, costumbres”, transformando las cárceles “en grandes casas de trabajo”.⁴⁰

Aunque se carece de datos suficientes para evaluar la importancia del trabajo carcelario, sí es posible afirmar que alcanzaron un éxito relativo. Por ejemplo, en el caso del trabajo femenino, la manufactura de encajes tuvo gran aceptación y demanda “tanto en las tiendas de la ciudad como en la región”, mientras que el trabajo masculino había adquirido tal importancia pues había alcanzado una producción de 300 mil pares anuales, suficientes para abastecer a toda la población de la capital del estado. En 1879, funcionaban en la penitenciaría de Jalisco los talleres de carpintería, herrería, zapatería, tejidos y sombrerería. El producto de los cinco talleres ascendía a 3 464 pesos; en 1890 se había agregado el de hojalatería, aunque su importancia se había reducido porque “el número de artesanos que se ocupan en los talleres de este establecimiento es muy escaso, en razón de que han salido muchos al servicio de las armas y otros con libertad preparatoria”. Para 1906, solo existían los de sestería y sombrerería, en tanto que en 1908 se sumó el taller de ebanistería. Para 1910 se suprimió este taller. El costo del mantenimiento de los talleres fluctuó

en esos años entre los 16 967 y los 30 854 pesos, aunque ya no se proporcionó información sobre los productos que se elaboraban en ellos.⁴¹

En 1883, el gobernador informó que durante ese año habían funcionado los talleres de carpintería, sombrerería y zapatería. El primero elaboraba “artefactos finos, de lujo y muy buen gusto”, el segundo “sombreros de todas clases, notándose el perfeccionamiento de este arte, en algunos finuras extremas y en el tercero, el calzado se consideraba “variado, de buena construcción y materiales”. Por eso no dejaba de lamentar que no estuviera en capacidad de establecer otros, donde un mayor número de reos se emplearan, “pues deduciendo del total de éstos, los pendientes y de la Federación, a quienes no se puede obligar a trabajar, resulta que apenas lo hacen 397”, de aproximadamente mil 550 que había ese año.⁴²

Como es de notarse la organización del trabajo carcelario sufrió una serie de altibajos. Sin embargo, se convirtió en un pilar del régimen penitenciario en la medida en que se le atribuyeron cualidades terapéuticas para la corrección de los internos y una modalidad de preparación para el porvenir pues las autoridades estaban convencidas de que los alejaría de cualquier tentativa de reincidir pues les daría “lo más indispensable para su subsistencia”.

INSTRUCCIÓN MORAL Y RELIGIOSA

Una de las preocupaciones de las autoridades fue la creación de lugares donde los presos recibieran instrucción moral y religiosa. El propósito fue que mediante la enseñanza los presos se moralizaran, es decir, que abandonarían sus antiguos valores y estilos de vida y alcanzarían un nivel adecuado de preparación que los apartara de su supuesta ignorancia, además de capacitarlos para nuevas ocupaciones y oficios. La instrucción religiosa permitiría que los criminales reflexionaran sobre sus costumbres y conductas que, sostenían tanto las autoridades civiles

⁴⁰ Medina y Ormaechea, 1892, 23 y ss.

⁴¹ Camarena, 1879, 43; Rodríguez Camacho, 1983, 62-63. Véanse también *Memorias e informes de los gobernadores del estado de Jalisco de 1879, 1890, 1906, 1908 y 1910*.
⁴² *Memoria de Gobierno*, 1883, 26.

como religiosas, estaban en el origen de sus actos ilícitos. La continua meditación sobre su forma de vida los llevaría así a un auténtico arrepentimiento. La instrucción y el aislamiento fortificaban el espíritu y “alentaban los buenos instintos”. Por eso, la instalación de escuelas en las cárceles, donde se les impartiría la enseñanza elemental, proporcionándoles habilidades y conocimientos útiles, junto con las cátedras de religión las cuales quedarían a cargo de personas respetadas quienes llevarían las luces, inculcándoles “las nociones del bien y la idea del deber y el arrepentimiento” a esas inteligencias incultas y “quizás depravadas”, así como la soledad de las celdas con el propósito de “que la conciencia les remuerda”, eran recursos fundamentales para la lograr la “corrección moral” de los internos para lograr su reincorporación a la sociedad.

Para los pensadores y reformadores sociales el mejor remedio contra los delitos y los criminales era la ilustración en la medida en que ésta obligaba a la meditación, a escuchar “los gritos de la conciencia” y a remover las malas pasiones, transformando a los hombres malos en honrados. De este modo las “escuelas normales del crimen”, como se definían las cárceles, serían “verdaderos templos de regeneración y rehabilitación”. La influencia benéfica del sacerdote, “de sus respectivos cultos”, favorecería la modificación de las costumbres y el carácter, así como las lecturas sobre moral, civismo y “otras convenientes” relativas a los oficios de los delinquentes permitía que los presos descubrieran “horizontes nuevos al espíritu”. El amplio programa de regeneración incluía pláticas sobre derechos políticos naturales del hombre y los ciudadanos.

De ahí que fuera imprescindible limitar la vida social de los presos, “impedir que la vida en prisión multiplicara las fuentes de contacto con las malas compañías y las inclinaciones viciosas”, que las visitas familiares y de amigos no fueran acicates para la “contemplación del infierno”, y no fueran utilizadas como medio para introducir “armas, licores embriagantes, naipes y otros objetos que les permitirán continuar [con] los mismos vicios que durante la libertad los ha conducido al crimen”. Con ello se intentaba suprimir la cultura carcelaria que surgía de la convivencia y de borrar o limitar la influencia del medio social en el que habían vivido antes de su ingreso a la cárcel. El especto penitenciario tendría que erigirse en un lugar que sustituyera “el rumor que for-

man las conversaciones obscenas y las canciones de amor que como torrente de maldad aturden los oídos, depravan la inteligencia y ahogan la voz” por “la voz de la enseñanza que moraliza”, por el ruido armónico del trabajo, “por las voces de las artes y los hábitos de trabajo, el orden y la disciplina”.⁴⁸

Aunque es difícil conocer con exactitud el grado en que se cumplieron estas expectativas, la penitenciaría de Jalisco representó un buen ejemplo de lo que podría esperarse de la obra de regeneración del régimen penitenciario. Sólo se cuenta con datos generales, así como con opiniones de algunos visitantes de los adelantos que se alcanzaron. La opinión general fue que las escuelas que funcionaban eran de primer nivel: contaban con los instrumentos más avanzados para la instrucción y los alumnos mostraban tal empeño en su aprendizaje que podían competir con sus similares más aventajados de las escuelas de mayor prestigio en el estado. Por ejemplo, Juan de Dios Peza no dejó de expresar su asombro “por los adelantamientos de los presos que manejan los instrumentos matemáticos, conocen los sólidos y hablan de frente a los mapas con la misma facilidad y acaso con mayores conocimientos que muchos alumnos de escuelas particulares. Parece que aman el estudio y que lo han emprendido con fe y entusiasmo”.⁴⁹

Es probable que la impresión de Peza acerca de la disposición de los presos para el estudio fuera correcta, pero también que éstos percibieran en su instrucción una utilidad más inmediata, es decir, obtener su libertad en un plazo menor a lo establecido en su sentencia. En la práctica, las autoridades convirtieron a la educación en un estímulo y un privilegio para los reos que cumplieran con una asistencia regular a las escuelas de la penitenciaría a fin de disminuir sus sentencias. En septiembre de 1888, la Junta Directiva de la Penitenciaría recomendó al gobierno estatal tomar en cuenta los méritos acumulados por varios presos en su aplicación escolar. En agosto, el procurador de Justicia había asistido a la penitenciaría para testificar el grado de aprovechamiento mediante la aplicación de exámenes en el local escolar destinado a los hombres, sorprendiéndose por los avances de los presos. En realidad, la admiración

⁴⁸ Peña, 1875, 61-67; Rivera Cambas, 1882, t. 2, 250-258; Romero, 1897, 8.

⁴⁹ Cardona, 1895, 379-396; Peza en Iguitiz, 1950-1951, 105.

de las autoridades al descubrir los “adelantamientos” de los presos revelaba el desconocimiento de la vida social anterior de los presos o una negación de los saberes, las habilidades y las prácticas culturales con las que venían precedidos. Por eso el procurador expresaba, con insistencia, que la “instrucción [era] el mejor remedio de moralizar de que pueda usarse en las prisiones”, y detallaba las materias que se impartían en las escuelas: lectura, moral, aritmética, gramática y, en algunos casos, conocimientos de geometría y álgebra.

Sin embargo, hizo varias recomendaciones del sistema de enseñanza, en particular en dos aspectos: dividir a

los niños que aún no tienen catorce años, de los mayores de esa edad no sólo porque así lo exige la separación de los conocimientos que adquirir, sino por la relación de criminales con niños, las más de las veces culpables por inexperiencia, lo cual no puede producir su moralización que es el fin con que se imponen las penas

y utilizar materiales didácticos adecuados a los adultos porque juzgaba que esos “son propios para niños de buena educación y no para hombres rudos, que tienen que llevar una vida ruda”.

Además, el procurador no estaba seguro de que la educación garantizara el resultado deseado, moralizar por igual a hombres y niños. Por ello su sugerencia de dividir la escuela en dos secciones: una se destinaría a los menores de 14 años y la otra a los mayores de esa edad. Algo verdaderamente interesante fue su propuesta de separar a los presos según sus delitos y hacerles obligatoria la lectura del Código Penal del Estado para que “leyeran con insistencia a lo que se exponen si vuelven a delinquir”. Atrás de ella estaba un propósito que iba más allá de lograr una mayor eficacia en el aprovechamiento escolar. Se ensayaba un ordenamiento que tenía relación estrecha con un principio de la criminología positivista, el cual se había incorporado al código penal, el cual sostenía la necesidad de desplegar un tratamiento específico para cada tipo de delinquentes que en efecto atacara las causas que los habían llevado a delinquir. En fin, la Junta Directiva estimó pertinentes las observaciones del procurador. Para julio de 1893, el presidente de la Junta informó al secretario de Gobierno de la realización de nuevos exámenes, los cuales eran una nueva “demostración de la dedicación y aprovechamiento de

los educandos y una prueba de que la penitenciaría había logrado educar y regenerar a los reos que concurren de una manera especial y provechosa, tanto en bien de ellos mismos, como de la sociedad en general”. La evaluación había comprendido preguntas de lectura, escritura, gramática, aritmética, sistema métrico decimal, geometría, geografía, historia de México, moral, urbanidad, derechos del hombre y caligrafía ornamentada.⁴⁵

Las autoridades mantuvieron el tono optimista y las esperanzas por el futuro de la penitenciaría de Jalisco, la cual estaba en vías de lograr una profunda reforma moral en “la clase desheredada patrocinada por el crimen”, esa reforma que se originaba en la combinación de los más diversos esfuerzos desplegados por las autoridades y la “actosolada filantropía” de los pensadores y reformadores sociales y cuyos frutos estaban depositados en esa institución que “transforma hombres criminales en seres verdaderamente útiles a la sociedad por su instrucción y moralidad”.⁴⁶

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La penitenciaría de Jalisco fue parte de un sistema de control social, así como producto de un conjunto de ideas y teorías que intentaron explicar el origen de la criminalidad, la naturaleza del criminal y los mecanismos de represión, castigo y corrección. Junto con la penitenciaría de Puebla y la penitenciaría del Distrito Federal, fue un símbolo del paradigma porfiriano del orden y el progreso. Asimismo encarnó una de las representaciones más acabadas y auténticas de los afanes de control social que se ensayaron en la época.

La vida interior, la organización, la disciplina, el trabajo, la instrucción, el detalle de la reglamentación de las actividades si bien era una utopía de control social no dejaron de revelar la visión de las elites políticas, tanto nacionales como locales, de uno los proyectos más ambiciosos de metamorfosis colectiva e individual y que intentó imponerse al conjunto de la sociedad.

⁴⁵ AHMG, c. 126, exps. 66 y 144, 1881.

⁴⁶ AHEJ, Justicia, c. 233, exp. 7980, 1893.

La penitenciaría de Jalisco tuvo un largo proceso de formación y experimentación en relación con el régimen carcelario más apropiado a sus circunstancias económicas, sociales y políticas. Desde esta óptica pretendió ser una variante regional de modelos y prácticas penitenciarias que se ensayaron a lo largo del siglo XIX no sólo en México, sino en otros países con procesos específicos.

OBRAS CONSULTADAS

- BARCENA, Mariano, *Descripción de Guadalajara en 1880*, Guadalajara, Instituto Tecnológico, 1954.
- CASTILLO, Alberto del, "Prensa, poder y criminalidad a finales del siglo XIX en la ciudad de México", en Ricardo Pérez Montfort, coord, *Hábitos, normas y escándalo. Prensa, criminalidad y drogas durante el porfiriato tardío*, México, CIESAS y Plaza y Valdes, 1997.
- CARDONA, S. Adalberto de, *México y sus capitales*, México, "La Europea, S.A.", 1898.
- CRUZ BARRERA, Nydia E., "Reclusión, control social y ciencia penitenciaria en Puebla en el siglo XIX", en *Siglo XIX. Revista de historia*, Segunda época, número 12, julio-diciembre, México, Instituto Mora, Universidad Autónoma de Nuevo León y Universidad Veracruzana, 1992.
- DOLLERO, Alfonso, *México al día (impresiones y notas de viaje)*, París, Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1911.
- FOUCAULT, Michel, *Microfísica del poder*, España, Las Ediciones La Piqueta, 1992.
- GIBRON, Eduardo, *Guadalajara (La Florencia mexicana), vagancias y recuerdos*, Guadalajara, Imp. del "Diario de Jalisco", 1893.
- GOFFMAN, Erving, *Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales*, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1992.
- GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, *La pobreza en México*, México, El Colegio de México, 1985.
- IGUINIZ, Juan B., *Guadalajara a través de los tiempos. Relatos de viajeros y escritores desde el siglo XVI hasta nuestro días*, Guadalajara, Banco Refaccionario de Jalisco, 1950-1951, 2 tomos.
- MACEDO, Miguel, "Discurso pronunciando por el Lic ..., Director presidente de la penitenciaría", en *Penitenciaría en México*, México, Imp. de Francisco Díaz de León, 1990.
- MEDINA Y ORMAECHEA, Antonio, *México ante los Congresos Internacionales Penitenciarios*, México, Secretaría de Fomento, 1892.
- MURÍA, José Ma. (Dir), *Historia de Jalisco. De la primera república centralista a la consolidación del porfiriato*, Guadalajara, Jalisco, Gobierno de Jalisco, 1981, t. III.
- OTERO, Mariano, *Obras del Lic. D. Mariano Otero*, México, Imprenta de Ignacio Otero.
- PADILLA ARROYO, Antonio, "De criminales a ciudadanos: la educación penitenciaría mexicana en el siglo XX", en *Convergencia. Revista de ciencias sociales*, año 3, núms. 8-9, marzo-septiembre de 1995, Universidad Autónoma del Estado de México.
- PADILLA, Antonio, "Pobres y criminales. Beneficencia y reforma penitenciaria en el siglo XIX en México", en *Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales*, México, Instituto Mora, Nueva Época, núm. 27, septiembre-diciembre de 1993.
- PENA, Francisco Javier, *Estudio higiénico de las cárceles en México. Tesis para el examen profesional de Medicina y Cirugía*, México, Imprenta de I. Cumplido, Hospital Real, 1875.
- PÉREZ VERDÍA, Luis, *Historia particular del estado de Jalisco desde los primeros tiempos de que hay noticia, hasta nuestros días por el Lic ...*, Guadalajara, tip. de la Escuela de Artes y Oficios del Estado, 1910-1911, 3 vols.
- PICCATO, Pablo, "La construcción de una perspectiva científica: miradas porfirianas a la criminalidad", en *Historia mexicana*, vol. XVII, julio-septiembre, núm. 1 (185), México, El Colegio de México, 1997.
- PICCATO, Pablo, "El discurso sobre la criminalidad y el alcoholismo hacia el fin del porfiriato", en *Hábitos, normas y escándalo. Prensa, criminalidad y drogas durante el porfiriato tardío*, México, D.F., CIESAS y Plaza y Valdes, 1997a.
- RIVERA CAMBAS, Manuel, *México pintoresco, artístico monumental*, México, Imprenta de la Reforma, 1889-1883, 3t.
- ROMERO, Félix, *El sistema penitenciario tratado por el ciudadano Lic ..., México*, Imprenta Moderna, 1897.
- RODRÍGUEZ CAMACHO, Joel Ayax, "Desde la cárcel real hasta la penitenciaría de Oblatos", en *Prevención y readaptación social en Jalisco*, Guadalajara, Gobierno del Estado, 1982.
- SPECKMAN GUERRA, Elisa, "Las flores del mal. Mujeres criminales en el porfirato", en *Historia mexicana*, vol. XVII, julio-septiembre, núm. 1 (185), México, El Colegio de México, 1997.

SPECKMAN GUERRA, Elisa, *Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración de justicia (Ciudad de México 1872-1910)*, México, El Colegio de México (tesis presentada para optar por el grado de doctor en historia), 1999.

URIAS HORCASTAS, Beatriz, “De la justicia a la ley: individuo y criminalidad en México Independiente, 1821-1871”, en *Revista de investigaciones jurídicas*, México, núm. 21, Escuela Libre de Derecho, 1997.

MEMORIAS E INFORMES DE GOBIERNO

BARCENA, Mariano, *Memoria presentada por el Ejecutivo del Estado a la XII Legislatura Constitucional en la sesión de febrero de 1890*, Guadalajara, Tip. del Gobierno, a cargo de J. G. Montenegro, 1890.

Memoria que el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco Jesús Leandro Cuna-rena presenta a la Legislatura al espirar el cuatrienio constitucional comprendido entre el primero de marzo de 1875 y el último de febrero de 1879, Guadalajara, Tip. de S. Banda, 1879.

Memoria presentada a la XI Legislatura del Estado de Jalisco por el Co. Gobernador Francisco Tolentino al concluir su periodo constitucional, Guadalajara, (spi), (1883-1887).

Memoria presentada al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco, por el gobernador constitucional C. Gral. Luis C. Curriel, en 2 de febrero de 1901, relativa al periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 1898 y el 15 de septiembre de 1900, Guadalajara, Imp. y Enc. de J. Cabrera, 1901.

Memoria formada por el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, C. Gral. Luis C. Curriel y presentada al H. Congreso del mismo Estado por el gobernador sustituto C. Juan R. Zacala, en 2 de febrero de 1903; relativa al periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 1900 y el 15 del mismo mes de 1902, Guadalajara, Imprenta y Encuadernación de J. Cabrera, 1903.

Memoria presentada a la XX Legislatura del Estado de Jalisco en 2 de febrero de 1905 por el gobernador constitucional C. Coronel Miguel Alimunda. Comprende el periodo transcurrido de 16 de septiembre de 1902 a 15 de septiembre de 1904, Guadalajara, Tip. de la Escuela de Artes y Oficios del Estado de Jalisco, 1905.

Memoria presentada a la XXI Legislatura del Estado de Jalisco en 2 de febrero de 1907 por el gobernador constitucional C. Coronel Miguel Alimunda. Comprende el pe-

riodo transcurrido de 16 de septiembre de 1904 a 15 de septiembre de 1906, Guadalajara, Tip. de la Escuela de Artes y Oficios del Estado de Jalisco, 1907.

Memoria presentada a la XXII Legislatura del Estado de Jalisco en 2 de febrero de 1909 por el gobernador constitucional C. Miguel Alimunda. Comprende el periodo transcurrido de 16 de septiembre de 1906 a 15 de septiembre de 1908, Guadalajara, Tip. de la Escuela de Artes y Oficios del Estado de Jalisco, 1909.

Memoria presentada a la XXIII Legislatura del Estado de Jalisco en 2 de febrero de 1911 por el gobernador constitucional C. Coronel Miguel Alimunda. Comprende el periodo transcurrido de 16 de septiembre de 1908 a 15 de septiembre de 1910, Guadalajara, Tip. de la Escuela de Artes y Oficios del Estado, 1911.